

por los mismos reos Romero y García, fueron estos juzgados y sentenciados á la pena de ser pasados por las armas; que se les negó el indulto, y con esto quedó la sentencia sin recurso; y que la ejecución de ella en manera alguna viola las garantías que los quejosos invocan siendo solo el cumplimiento de una ejecutoria legal. Con apoyo de la ley de 20 de Enero de 1869, se declara: que por sus propios legales fundamentos es de confirmarse y se confirma la sentencia del juez 1º suplente del Distrito de Guanajuato, pronunciada en 15 del presente mes, declarando: que la justicia federal no ampara á Silvestre Romero y Abraham García contra las disposiciones de la gefatura política de esa ciudad, encaminadas á la ejecución de la pena de muerte que en tiempo hábil se les impuso y de la que no obtuvieron indulto por el delito de plagio.

Devuélvase sus actuaciones al juez primer suplente de Distrito que las elevó acompañándole copia certificada de esta sentencia para los efectos consiguientes; publíquese por los periódicos y archívese á su vez el tomo.

Así por unanimidad de votos lo decretaron los CC. Presidente y Ministros que formaron el tribunal pleno de la Corte Suprema de Justicia de los Estados Unidos Mexicanos y firmaron.—*S. Lerdo de Tejada. —Pedro Ogazon. —Juan J. de la Garza. —José Arteaga. —J. M. Lafragua. —P. Ordaz. —M. Auza. —S. Guzman. —Luis Velázquez. —M. Zavala. —José García Ramírez. —Luis María Aguilar, secretario.*

Son copias que certifico. México, Setiembre veintinueve de mil ochocientos setenta y uno.—*Lic. Agustín Peralta, oficial mayor.*

AMPARO.

Juicio promovido ante el juzgado de Distrito de Campeche por el C. Joaquín Gutierrez de Estrada, como albacea de la testamentaria de la Sra. Dña Faustina Estrada de Gutierrez, contra un acuerdo del gobernador del Estado que declara, que al pueblo de Sahcabchen del partido de Champoton corresponde una legua cuadrada de las tierras del rancho de S. Pablo.

PEDIMENTO DEL C. PROMOTOR FISCAL.

C. Juez de Distrito.

El Promotor fiscal que suscribe, dice: En las diligencias de amparo que tengo á la vista promovidas por D. Joaquín Gutierrez de Estrada, pidiendo se le proteja contra una disposición del gobierno del Estado que ordenó la concesion de una legua cuadrada de las tierras del rancho de S. Pablo, para el pueblo de Sahcabchen, se notan algunos puntos de hecho que es indispensable esclarecer para poder pedir con mejor conocimiento de causa sobre si se debe ó no conceder el amparo. Tal es por ejemplo la asercion no comprobada del peticionario, de que los vecinos y autoridades del pueblo expresado siempre que fueron citadas para que manifestaran si tenían que observar algo en las mensuras que se practicaban del mencionado rancho, contestaron que nada tenían que objetar, porque estaban en la conviccion de que el pueblo no poseía mas tierras que las en que estaba situado. Esta aseveracion se halla en abierta contradiccion con lo que asegura el gefe político del partido de Champoton en el oficio que, como parte del informe del gobierno, obra de fojas 5 á 6, y en que trascribiendo la comunicacion que le dirigió el comisario municipal de Sahcabchen, manifiesta, que por datos que tiene adquiri-

dos, es casi cierto que este pueblo posee ó debe poseer ciertas tierras que le fueron concedidas en lo antiguo, y de las que los propietarios colindantes lo han ido expropiando paulatinamente. Tal contradicción engendra la duda sobre el derecho del amparante y el del pueblo de Sahcabchen, y para disiparla, se hace indispensable, como he dicho, aclarar perfectamente con la comprobación de los hechos ese mismo derecho. El medio mas propio para conseguirlo, es abrir este negocio á prueba, como lo dispone el art. 10 de la ley de 20 de Enero de 1869, en donde si bien se establece que tal procedimiento se disponga cuando á juicio del juez sea necesario, después de evacuar el fiscal el traslado sobre lo principal, tambien es lógico suponer que á instancia de este puede dictarse ese trámite cuando á ello lo obligan idénticas causas que al juez, y que en mi concepto no son otras que el deber conocer con toda claridad las cosas para poder determinar acertadamente en ellas.

Con lo expuesto debería terminar este dictámen pidiendo que se abriera el negocio á prueba sobre los puntos indicados; mas no debo cerrarlo sin antes hacer notar que la ley citada, disponiendo como dispone, que no se considere como parte ni aun á la autoridad contra quien se pide el amparo, con menor razon puede suponer tal carácter en el presente caso á los vecinos y autoridades de Sahcabchen, quienes á mi juicio son los únicos que pueden presentar los justificantes que acrediten los asertos del jefe político aludido, y por lo cual parece que hay necesidad de darles intervención en el asunto como partes. Además, por el art. 12 de la ley referida se dispone, que hay obligación de facilitar al promotor y al actor ó á su procurador los datos probatorios que necesiten; y esto acaba de persuadir, que en esta clase de juicios el promotor y el actor no mas son partes. Ahora bien; esto conficto, y para poder conciliar los intereses y justicia del pueblo de

Sahcabchen con las disposiciones de la ley, ¿qué se deberá hacer? Lo mas acertado á mi ver, es que el infrascrito pida los datos que pueda tener ese pueblo para exhibirlos en el juicio y alegar con vista de ellos y los del actor lo que juzgue mas conforme. Por manera, que se debe fijar la conclusión con estas proposiciones:

Primera; que se abra el presente juicio á prueba para esclarecer los hechos ya apuntados.

Segunda; que se notifique á la autoridad respectiva de Sahcabchen y aun á la del partido de Champoton, que el suscrito tiene necesidad de todos los datos relativos al derecho que pueda tener aquel pueblo á la legua de tierras, materia de este amparo, para exhibirlos como pruebas que puedan favorecer ese derecho; y por lo tanto espera que se le envíen dentro del término que el juzgado señale, atendida la distancia.

Campeche, Junio veintiseis de mil ochocientos setenta y uno. (Firmado.)—*José Gómez.*

Sentencia del Juzgado de Distrito.

Campeche, Julio veintiuno de mil ochocientos setenta y uno.

Vistos estos autos de amparo promovido por el C. Joaquín Gutierrez de Estrada, como albacea testamentario de su Sra. madre D^a Faustina Estrada de Gutierrez, contra el acuerdo que en 7 de Febrero de 1868 dictó el gobierno de este Estado, de acuerdo con su consejo, declarando que al pueblo de Sahcabchen, partido de Champoton, le correspondía como egidos una legua cuadrada de las tierras del rancho "San Pablo." Visto el ocuso de queja del promovente; el informe del gobierno del Estado en que incluye el dictámen del consejo del mismo; las pruebas aducidas por el quejoso durante el término, y su alegato para definitiva; no tomando en consideración el del ministerio fiscal por no haberse presentado aun:

que de autos consta, que el C. Joaquin Gutierrez de Estrada es albacea testamentario de su Sra. madre D^a Faustina: que las tierras cuestionadas pertenecen desde hace mucho tiempo al rancho S. Pablo, de la propiedad de la testamentaria de dicha Sra: que segun el testimonio de los CC. Felipe Torres y José M^a Carpizo, personeros que fueron de dicho rancho, los vecinos de Sahcabchen han pagado en diversas épocas, sin contradiccion, á los dueños del citado rancho, los arrendamientos de las tierras en que labraron: que la mensura de las tierras del propio rancho ha sido practicada en en toda forma y aprobada judicialmente: que al procederse á esta mensura fué citada la autoridad municipal de Sahcabchen como lo fueron todos los colindantes, y ni protestó ni hizo objecion alguna contra la mensura: que el gobierno del Estado y su consejo no han tenido competencia legal para dictar su acuerdo de 7 de Febrero de 1868, puesto que en último caso la solicitud de los vecinos de Sahcabchen hubiera sido materia de un juicio de oposicion, del esclusivo conocimiento de los tribunales federales; que aun cuando la hubieran tenido, no han podido fallar sin formalidad alguna de juicio: que en consecuencia, en el presente caso, se ha cometido una verdadera expropiacion, la que segun la ley fundamental de la República, solo puede verificarse por las causas y con los requisitos que ella misma demarca, por no haber sido expedida hasta hoy la ley reglamentaria del art. 27 de la Constitucion; y finalmente, que tanto este art. como el 16 de la misma carta han sido violados con el acuerdo del gobierno del Estado y su consejo: con cuanto mas considerar convino, y con fundamento de los artículos constitucionales citados y de la fraccion 1^a art. 1^o de la ley de amparo vigente, este juzgado falla:

Primero; La justicia de la Union ampara y protege al C. Joaquin Gutierrez de Estrada como albacea de la testamentaria de su Sra. madre D^a Faustina Estrada de Gu-

tierrez, contra el acuerdo del gobierno del Estado de 7 de Febrero de 1868, que declara corresponder al pueblo de Sahcabchen en el partido de Champoton, una legua cuadrada de tierra del rancho "San Pablo" de la propiedad de la misma testamentaria.

Segundo; Líbrese oficio al superior gobierno del Estado; con insercion del presente fallo, para que se sirva dictar las disposiciones que juzgue conducentes á su cumplimiento.

Tercero; De conformidad con el art. 27 de la ley relativa, publíquese esta sentencia en el periódico oficial, elevándose los autos á la Suprema Corte de Justicia para su revision. Así lo provoyó y firma el C. Lic. Pedro Montalvo, juez de Distrito de este Estado. Doy fé. (Firmados.)—*Pedro Montalvo.*—Ante mí.—*Francisco Campos.*

Ejecutoria de la Suprema Corte de Justicia.

México, Setiembre veintinueve de mil ochocientos setenta y uno.

Visto el juicio de amparo promovido ante el juzgado de Distrito de Campeche, por el C. Joaquin Gutierrez Estrada, en representacion de la testamentaria de la Sra. D^a Faustina Estrada de Gutierrez, contra la disposicion del gobierno del Estado de siete de Febrero de 1868 que declaró, que al pueblo de Sahcabchen, sito en el partido de Champoton y dentro de las tierras del rancho "San Pablo" le corresponde una legua cuadrada de esas mismas tierras; y

Considerando: que segun aparece en el expediente testamentario de la Sra. Estrada de Gutierrez por lo que la Orden citada importa la violacion de la garantía á que se refiere el art. 27 de la Constitucion federal, se decreta:

Primero; que se confirma la sentencia pronunciada el 21 de Julio último por el juzgado de Distrito de Campeche en la parte que declara, que la justicia de la Union

ampara y protege al C. Joaquin Gutierrez y Estrada como albacea de la testamentaria de su Sra. madre D^a Faustina Estrada de Gutierrez, contra el acuerdo del gobierno del Estado de 7 de Febrero de 1868, que declara corresponder al pueblo Sahcabehen, en el partido de Champoton, una legua cuadrada de tierras de las del rancho "San Pablo" de la propiedad de la misma testamentaria.

Segundo; lo acordado respecto del promotor.

Devuélvanse sus actuaciones al juzgado de que proceden con copia certificada de esta sentencia para los efectos consiguientes; publíquese por los periódicos y archívese á su vez el tomo.

Así por unanimidad de votos lo decretaron los CC. Presidente y Ministros que formaron el tribunal pleno de la Corte Suprema de Justicia de los Estados Unidos Mexicanos y firmaron.—*S. Lerdo de Tejada.*—*Pedro Ogazon.*—*Juan J. de la Garza.*—*José Arteaga.*—*J. M. Lafragua.*—*P. Ordaz.*—*M. Auza.*—*S. Guzman.*—*L. Velazquez.*—*M. Zavala.*—*José García Ramírez.*—*Luis M. Aguilar*, secretario.

Son copias. México, Octubre cinco de mil ochocientos setenta y uno.—*Agustín Peralta.*

AMPARO.

Juicio promovido ante el juzgado de Distrito de Michoacan por el C. Juan José Gil, contra el C. presidente del ayuntamiento de Coeneo, por violacion de garantías.

PEDIMENTO DEL CIUDADANO PROMOTOR FISCAL.

C. juez de Distrito.

El promotor dice: que del informe justificado que rindió el C. presidente del ayun-

tamiento de Coeneo, aparece comprobado el hecho de haberse expropiado al C. Juan José Gil de una fraccion de terreno de su propiedad; y aunque en el mismo informe se dice que no se indemniza al propietario por haber este consentido; no hay otra constancia del consentimiento que la copia de la parte conducente del acta en que consta el acuerdo del ayuntamiento de Coeneo para la expropiacion, y aunque tal documento, á juicio del promotor, no justifica el consentimiento que se dice prestado por el dueño del terreno, ese juzgado, para proceder con mas seguridad, mandó abrir el negocio á prueba, y del dicho de los testigos que han declarado dentro del término legal, resulta: que la expropiacion se hizo sin la previa indemnizacion y contra la voluntad del quejoso, y si bien es cierto que este último extremo, ó sea la falta de voluntad no es de aquellos que propiamente se puede probar por el dicho de testigos, porque no se puede probar de esa manera una negativa, tambien es cierto que no es al quejoso á quien corresponde la prueba de no haber prestado su consentimiento, y por lo mismo el promotor cree que se ha violado en el caso presente la garantía que concede el art. 27 de la Constitucion general, y que la justicia federal debe amparar en el goce de ella al C. Juan José Gil.

En cuanto á la violacion del art. 16 de la Constitucion, que el C. Gil cree infringido por habersele detenido solo por no haberse prestado á mudar la cerca que limitaba el terreno de que se le expropió, segun dice el quejoso, debe tenerse presente, que la detencion no excedió de los tres dias, cuyo término puede durar sin auto motivado de prision; que por lo mismo y no debiendo presumirse que ninguna autoridad cometa una arbitrariedad, debe probarse este extremo, y que esta prueba toca al quejoso: que en el caso presente, aunque el C. Gil la ha rendido articulando al efecto á los testigos que presentó la pregunta cuarta del interrogatorio que obra en autos, de